

# Neoliberalismo, crisis y universidades en México

Rodríguez-Araujo, Octavio

---

**Octavio Rodríguez Araujo:** Cientista político mexicano. Profesor e investigador en la UNAM. Autor de numerosas publicaciones, ensayos, artículos y libros.

---

*La política neoliberal en relación a las universidades y a la investigación científica se ha tornado en México, como en otros países fundamentalmente clasista y elitista. En este cuadro, las universidades públicas están en desventaja frente a las universidades privadas. El área de ciencias sociales sufre - más que otras - hostigamiento y discriminación, y además, mediante mecanismos de todo tipo, se pretende corromperla y subordinarla a los requerimientos del capital y de la ideología dominante. Los intelectuales se ven obligados con frecuencia a matizar sus críticas, cuando no a callarlas. La crisis crea un clima apropiado para la aplicación de los criterios neoliberales y para inhibir el rechazo que estos mismos provocan en los medios académicos.*

A comienzos de los años 80 y muy poco después del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, tuve la oportunidad de impartir un curso a profesores de ciencias sociales, económicas y administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de ese país centroamericano (UNAN)<sup>1</sup>.

Una de mis grandes sorpresas - y que me perdonen los profesores, entonces mis alumnos - fue su bajo nivel de conocimientos y su también escaso entrenamiento en el análisis. Esta experiencia no es una simple anécdota, sino una enseñanza que me habría de servir posteriormente para entender, mutatis mutandis, un modelo político en relación con las universidades, no sólo latinoamericanas, cuya aplicación ya se había iniciado en mi país, México.

---

<sup>1</sup>Le debo esta experiencia al Dr. Bernardo Kliksberg, alma del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), cuya sede se encuentra en Caracas, Venezuela.

Para entender la modesta preparación de los profesores de la universidad nicaragüense hice algunas indagaciones. Lo que descubrí fue muy importante: el largo gobierno del dictador abandonó al mínimo, literalmente, el flujo de todo tipo de recursos a la universidad pública. La razón de este abandono tenía una explicación muy sencilla: los hijos de la gran burguesía del país se formaban en universidades extranjeras, las mejores del mundo. La clase media sin los recursos suficientes para enviar a sus hijos a estudiar a otros países, los inscribía en la Universidad Centroamericana (la UCA), privada y de jesuitas, según entiendo. Los hijos de esa amplia capa de la población que podríamos denominar clase media baja y proletariado, estudiaba en la UNAN. Estos últimos no eran preocupación de la oligarquía somocista, por lo tanto no importaba que estuvieran bien preparados o, de otra manera dicho, importaba mucho que estuvieran mal preparados; en los cálculos gubernamentales no existía ni la menor intención de que los egresados de la UNAN tuvieran alguna participación en la dirección del país, manejado como empresa. Bastaba que los jóvenes de la oligarquía estuvieran bien preparados, no se requerían más cuadros para mantener la gran empresa nicaragüense de Somoza y de su círculo de allegados.

Con el triunfo de la revolución en 1979 la oligarquía en pleno, con algunas excepciones, abandonó el país. Los mejores cuadros científicos y técnicos encontraron colocación en otros países - sus certificados, grados y diplomas de las grandes universidades del mundo se convirtieron en patentes de curso para ejercer en cualquier parte o para hacerse cargo de los negocios familiares fuera de Nicaragua. Dos tipos de profesionales se quedaron: los imprevistos, que no habrían de colocarse como tales en el extranjero, y los que apoyaban a la revolución, no todos lamentablemente con los conocimientos necesarios para reconstruir un país desmantelado en los últimos momentos del somocismo.

En México, como pude comprobar a mi regreso de Nicaragua con ese nuevo elemento para la interpretación (mi experiencia universitaria del fenómeno nicaragüense) , se había iniciado ya una política semejante, que correspondía puntualmente con el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de las universidades privadas y el abatimiento de los niveles de enseñanza-aprendizaje y de los apoyos a la investigación en las universidades públicas - entre éstas la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, probablemente la universidad más grande del mundo y una de las tres más antiguas del continente americano. El fenómeno de deterioro era mayor, como es de suponerse, en el área de ciencias sociales y humanidades que en los campos de las ciencias naturales, las ingenierías y la medicina. Y todo el mundo sabe que es más frecuente que en las ciencias sociales y en las hu-

manidades se formen las conciencias críticas de un país que en aquellas disciplinas donde el sujeto y el objeto de conocimiento están disociados o se ven así.

Este deterioro de las universidades públicas en México habría de agudizarse al final del auge petrolero, es decir, a partir de 1982 aproximadamente. La riqueza del boom petrolero alcanzó también a las universidades, especialmente para gastos de relumbrón, pero una vez agotada la primera, las segundas se vieron privadas otra vez de recursos y su personal asalariado (académicos y administrativos) dejó de tener incentivos para el desarrollo de su actividad (en este caso, con incentivos no se quiere decir aumentos de salarios). En 1989, Pablo González Casanova, ex-rector de la UNAM, comentaba en una conferencia pública que a principios de los 70 el sueldo de un profesor de tiempo completo era de alrededor de 16 salarios mínimos y que ahora es sólo de tres. Y si esto era (es) en la UNAM, donde se realiza alrededor de la mitad de la investigación científica de México, ¿qué no podría decirse de las universidades públicas de las entidades federativas del país?

No puede entenderse la situación de las universidades públicas, de las ciencias sociales y de las humanidades y de los intelectuales críticos de México sin la crisis económica. Pero tampoco sin la actuación deliberada de los gobiernos neoliberales, neoconservadores o del tipo combinado de ambos hacia las universidades.

### ***Políticas públicas y universidad***

Sergio Bagú, en un documentado e inteligente artículo<sup>2</sup> cita dos estudios sobre el caso estadounidense y la política estatal hacia las universidades y la preparación de científicos. Siendo EEUU uno de los países que mayor número de científicos de alto nivel ha producido ¿cómo se explica que, en general, no se auspicie el conocimiento de la ciencia básica en los estudios medios y que los estudiantes de ese país, en ese renglón del conocimiento, se ubiquen entre los peores del mundo y que, al mismo tiempo, la investigación en los distintos campos científicos y tecnológicos esté entre los primeros lugares del mundo? La respuesta está en la política educativa y científica que se ha intensificado desde principios de los 80, consistente en que «la selección de la novísima generación de investigadores en los campos más avanzados de conocimiento científico-técnico contemporáneo ha comenzado a prepararse desde las primeras etapas educacionales, dotando de los mejores profesores y los mejores laboratorios a las instituciones educativas con muy elevados aranceles y desmantelando, a la vez, en equipos y docencia, a las que reciben a los hijos

<sup>2</sup>«Universidad y Estado en América Latina: historia de encuentros y desencuentros», Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, Año XXXIV, octubre-diciembre de 1988, N° 134, pp. 17-37.

de las familias de menores recursos. La consecuencia es que en los exámenes de admisión a los cursos superiores de ciencia y tecnología en las mejores universidades, los que obtienen las más altas calificaciones son alumnos muy bien preparados, procedentes de familias que han podido afrontar el alto costo de las mejores escuelas del país<sup>3</sup>. Sabido es, también, que en Gran Bretaña, bajo el gobierno de la nueva derecha thatcheriana, las principales universidades se han visto privadas de buena cantidad de apoyos públicos, obligándolas a seguir un poco el modelo de las universidades estadounidenses, consistente en recurrir a fundaciones y empresas particulares, enajenando así, irremediamente, parte de su independencia en los campos de investigación. En Italia se ha seguido este mismo modelo, y las manifestaciones de descontento estudiantil, en marzo de 1990, han calificado al fenómeno, que por lo visto parece ser mundial, de privatización de las universidades públicas.

La lógica, como puede observarse, es en lo fundamental la misma en países tan distantes en la producción de conocimiento, de ciencia y de tecnología, como Nicaragua y México - ya de suyo distantes -, de una parte, y EEUU, Gran Bretaña e Italia, de otra.

El primer dato que debe ser tomado en cuenta es que en México el gasto del sector privado en ciencia y tecnología (CyT) ha sido estimado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) entre 5 y 15 por ciento del total. Esto es, que al menos el 85% del gasto nacional en CyT le corresponde al sector público<sup>4</sup>.

Con esta aclaración, y con base en la misma fuente mencionada en el párrafo anterior, el gasto público nacional en CyT en relación con el PIB ha fluctuado, de 1971 a 1987 (último dato conseguido), entre 0,29% y 0,46%, siendo los más altos porcentajes precisamente en la breve época del auge petrolero. Paralelamente, el salario medio real de los investigadores comenzó a disminuir a partir de 1975<sup>5</sup>, lo que se debe, en principio, a un aumento del número de instituciones encargadas de docencia y de investigación de nivel superior y de posgrado en el país y a la política de topes salariales (política iniciada desde el gobierno de López Portillo, en diciembre de 1976)<sup>6</sup>.

<sup>3</sup>Sergio Bagú, *Idem*, p. 25. (subrayado nuestro).

<sup>4</sup>Lustig, Nora et. al.: *Evolución del gasto público en ciencia y tecnología (1980-1987)*, Academia de la Investigación Científica, México, marzo de 1989. El CONACyT es una institución creada por el gobierno federal en 1971 para apoyar la investigación científica y tecnológica en varios renglones, incluyendo la formación de recursos humanos. La información de estos datos y de los que siguen, en este apartado, fue proporcionada por mis ayudantes de investigación Sol Alvarez, Roxana Juárez, Patricia Martínez Torreblanca y Virginia Mujica.

<sup>5</sup>*Idem*, p. 3.

<sup>6</sup> La política de topes salariales significa que en las revisiones de salarios no se toleran aumentos mayores de un cierto porcentaje, aun en el caso en que algunas empresas de alta productividad ha-

En otros términos, el porcentaje del gasto público en CyT se ha mantenido más o menos igual, sin alcanzar nunca siquiera el medio punto porcentual en relación al PIB, con el agravante de que los relativos incrementos se han dirigido al gasto en edificios, laboratorios, administración, y más personal (especialmente administrativo), a costa de los salarios de docentes e investigadores. Por lo que se puede afirmar que han disminuido los estímulos para la investigación en términos laborales.

Paralelamente a la política de topes salariales y de disminución del llamado gasto público para el desarrollo social, también denominado salario indirecto, se creó un sistema de incentivos mediante becas denominado Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que no modifica las relaciones laborales de quienes realizan investigación.

El SNI consiste en lo siguiente: un investigador hace una solicitud acompañada de su currículum vitae y de documentos probatorios de éste; su solicitud es examinada por un jurado cuyo dictamen es inapelable, y si es aprobado puede ser candidato a investigador (normalmente personas sin doctorado en ejercicio activo en la investigación), o investigador en tres niveles. Cada uno de estos niveles significa una beca mensual equivalente a un determinado número de salarios mínimos: en el presente, tres salarios para la clasificación más baja y seis para la más alta. Las becas son renovables cada tres años si el Investigador Nacional (nombramiento otorgado), a juicio de sus dictaminadores, ha sido productivo. Es un sistema muy noble, entre otras razones, porque no impone campos ni temas de investigación, pero a la vez no resuelve, porque no es su objetivo, el problema de la disminución real de los salarios de profesores e investigadores universitarios ni es suficiente para que un investigador pueda allegarse recursos que las instituciones académicas restringen crecientemente, con excepciones<sup>7</sup>.

Es interesante hacer notar que en la primera convocatoria para el SNI se presentaron sólo 3.118 solicitudes en tres grandes áreas de conocimiento<sup>8</sup>. De éstas sólo se

---

yan querido pagar mejores salarios a sus trabajadores. Esta política ha sido seguida con enorme rigidez en el caso de las universidades e instituciones de investigación públicas, lo que ha provocado no sólo que los salarios estén muy por debajo de los aumentos de los precios, sino en una pendiente que se separa cada vez más de la proporción en dólares desde 1975.

<sup>7</sup>Los salarios, en las universidades públicas, más una beca del SNI apenas logran contrarrestar la pérdida del nivel adquisitivo de los investigadores, por lo que la suma de ambos ingresos no puede sustituir los apoyos que antiguamente daban las instituciones mediante fotocopias, equipos de trabajo, suscripciones, traducciones, ayudantes de investigación, etcétera.

<sup>8</sup>Area I: Ciencias físico-matemáticas e ingeniería, Area II: Ciencias biológicas, biomédicas, agropecuarias y químicas, y Area III: Ciencias sociales y humanidades. véase Salvador, Malo: «El Sistema Nacional de Investigadores», fotocopia. Más adelante se formó una cuarta área: Ingeniería y tecnología.

aprobaron 1.650, es decir, casi el 53%. De este total de aprobados, 235 fueron de ciencias sociales y humanidades (14,24%). En 1988 se presentaron 2.142 solicitudes, y fueron aprobadas 1.475 (casi 69%), de las cuales 590 fueron de primera solicitud y el resto de renovación y de solicitudes repetidas (quienes fueron rechazados antes y volvieron a solicitar). De las aprobadas en 1988, 207 correspondieron al área de ciencias sociales y humanidades, es decir el 19,46%. El área en la que hubo mayor número de solicitudes fue la de ingeniería y tecnología (43% del total). A primera vista, parece que el área de ciencias sociales y humanidades aumentó en proporción con el total, pero los datos así presentados no permiten descubrir que la dictaminación positiva de las solicitudes fue de sólo dos por cada cinco, mientras en las otras áreas la aprobación de solicitudes fue mayor, proporcionalmente<sup>9</sup>.

De los datos anteriores quisiera destacar, solo a título de ejemplo, que en 1984, la UNAM tuvo una presencia en el SNI de 872 investigadores y el Colegio de México de 53, y que en 1986, del 100% del gasto público ejercido en las instituciones académicas, el 46,5% correspondía a la UNAM y el 4,4% al Colegio de México, siendo que del total de investigadores la UNAM participó con el 52,85% y El Colegio de México con 3,21%<sup>10</sup>. Si la comparación se hiciera entre las mismas disciplinas en ambas instituciones, la diferencia sería más aguda, ya que en el caso de la UNAM se incluyen no sólo las áreas I y II mencionadas en la nota 8, que no existen en El Colegio de México y, además, las de esta institución no son todas las del área III en la UNAM.

Esta desproporción se debe, según las hipótesis más socorridas en el medio, a la mayor aceptación que tiene El Colegio de México en los ámbitos gubernamentales, dada la fama existente de que los investigadores de esta institución son menos críticos, con excepciones notables, que los del área de ciencias sociales y humanidades de la UNAM.

Otro indicador, que ya he mencionado anteriormente, es el salario. Un profesor o un investigador de tiempo completo de la máxima categoría en la UNAM gana al mes, antes de impuestos y otras deducciones, 1.474.952 pesos, que en dólares significa, a la tasa de cambio en el momento de escribir este artículo, 536 dólares. En 1975 un investigador, del mismo nivel y en la misma institución, obtenía mensualmente un salario equivalente a 2.000 dólares. Recientemente hubo sorpresa nacio-

<sup>9</sup>Véase al respecto el análisis de Salvador Malo y Beatriz González: «Evaluación de 1988 y situación global actual del SNI», Revista ciencia y Desarrollo, México, enero-febrero de 1989.

<sup>10</sup>La diferencia de los años comparados en este párrafo se debe a la información disponible, pero no pienso que altere mucho la proporción. Los datos fueron tomados de las fuentes citadas en las notas 4 y 8, supra.

nal (escándalo, de hecho) cuando el director del sistema público de autobuses de la Ciudad de México (denominado «Ruta 100») declaró en una conferencia en una escuela universitaria que los choferes de «Ruta 100» tenían un salario mínimo de 3,5 millones de pesos mensuales, después de impuestos, y que, con horas extras, podían llegar a ganar hasta 8 millones de pesos al mes.

Esto es, un investigador del máximo nivel y de tiempo completo de la UNAM obtiene el 18.44 por ciento de lo que puede ganar un chofer de autobús urbano trabajando ambos más de 40 horas a la semana, sin tomar en cuenta que en el caso del investigador estamos hablando de su ingreso antes de impuestos.

### ***Crisis económica, universidades e intelectuales***

La crisis económica ha servido para justificar, no siempre con fundamento, la restricción de recursos para las universidades estatales, con la salvedad de políticas deliberadamente oscurantistas hacia aquéllas, cuyas máximas expresiones pudieron ser observadas (y ahora sus efectos) en Argentina, Chile, Uruguay, en cierta medida en Perú, y por décadas en El Salvador.

Pero la crisis económica ha significado mucho más que la mera canalización de recursos, especialmente desde 1982, año en que el gobierno fue ocupado predominantemente por tecnócratas de ideología y proyectos neoliberales.

La situación descrita en el apartado anterior ha propiciado, más que antes, que profesores e investigadores de tiempo completo en las universidades públicas (alrededor del 27% del total en niveles de licenciatura y de posgrado en instituciones bajo régimen público en el país) busquen otros ingresos. Es común que muchos investigadores (pero más los profesores) se empleen a tiempo completo en dos universidades a la vez o que ocupen simultáneamente una plaza también de tiempo completo en la administración pública o en el sector privado.

Esta circunstancia, generalizada aunque no suficientemente cuantificada, provoca dos situaciones principales en perjuicio de la actividad científica y docente en los centros universitarios: 1) descuido de estas actividades, diversificación, desatención a alumnos, simulación, ocupación de plazas a las que otros, con mayor vocación, aspiran, etcétera; y 2) violación a la legislación universitaria que, en general, autoriza un número muy reducido de horas a la semana para actividades remuneradas fuera de la institución.

Este segundo aspecto lleva a las autoridades a hacerse las desentendidas, a veces de buena fe, porque comprenden que los ingresos universitarios son ciertamente bajos, pero otras veces porque así tienen la opción de controlar o sujetar a los académicos, inhibiendo de este modo las posibilidades de posiciones críticas, autónomas y contestatarias de Profesores e investigadores.

Otro aspecto, que ha sido denunciado por varios estudiosos sobre el tema, entre ellos por James Petras, ha sido la cooptación vía partidas presupuestarias especiales o subsidios externos para la investigación. Este mecanismo es seguido tanto por instancias gubernamentales como por organismos o fundaciones privados. Los criterios para otorgar «ayudas» para la investigación son simples: los que convienen a la institución patrocinadora. Esto no quiere decir, para el caso concreto de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se restrinja la libertad de investigación y que quien quiera estudiar un tema no contemplado en las prioridades nacionales fijadas por el gobierno de turno se vea limitado para hacerlo. El mecanismo es otro: el que necesite recursos para investigación podrá tenerlos si cumple dos requisitos principales: a) estar en buenos términos con las autoridades académico-administrativas, y b) ajustar su proyecto o cambiarlo a los requerimientos de la institución que podría otorgar los recursos necesarios. Vale decir, que la libertad de investigación está muy restringida, en los hechos, en las universidades de provincia, con muy contadas excepciones.

El sistema de apoyos es, como se ha visto, optativo. Pero dadas las condiciones de los salarios universitarios, son muy pocos los investigadores que logran superar la tentación de «ser patrocinados».

Si en el pasado la opción de acogerse a proyectos de investigación patrocinada era más o menos excepcional, en el presente las posibilidades de independencia en la selección de temas de investigación y sus respectivas hipótesis se reducen crecientemente.

Agréguese a lo anterior que las editoriales han estado imponiendo dos criterios discriminatorios principales: el volumen de la investigación y el tema. Más de 300 cuartillas en una investigación encontrarán obstáculos para ser publicadas. Asuntos que no tengan que ver con la actualidad, con la coyuntura, también. De marxismo, prácticamente nada (está fuera de moda).

No pude conseguir el dato preciso, pero por entrevistas con algunos de los principales editores y visitas a las librerías más importantes en Ciudad de México, po-



dría afirmar que la mayor parte de los libros publicados en los últimos diez años, en el área de las ciencias sociales y las humanidades, no es producto de investigaciones de largo aliento. Buena parte de estos libros son recopilaciones de uno o varios autores y de artículos ya publicados en otros medios; más ensayos que artículos científicos. Este fenómeno, según testimonios de investigadores entrevistados, obedece a la necesidad de presentar anualmente producción a las comisiones dictaminadoras, tanto universitarias como de otras instancias que auspician investigación, pues es común que la productividad (preocupación relevante en los tiempos actuales de la llamada modernización) se mida por páginas publicadas, independientemente de la calidad, de la originalidad y de la creatividad.

En las revistas donde tendrían cabida las investigaciones sobre temas políticos, económicos, sociológicos e incluso filosóficos, se practica un grado de censura que hace diez años era impensable. En revistas universitarias no existía la censura por razones políticas. Ahora sí. He sido testigo de aberraciones tales como rechazar un artículo sobre un tema eminentemente político por razones políticas en una revista especializada en temas políticos. En revistas comerciales, tanto de análisis como de divulgación, la exclusión por razones políticas es todavía más frecuente (sólo se admiten las críticas denominadas eufemísticamente constructivas o propositivas). En unos casos, en las revistas universitarias, las razones de la censura parecen ser estrictamente ideológicas. En otros, en las revistas comerciales, esas razones tienen que ver con la publicidad, además de la ideología de sus propietarios.

### ***Los oportunistas***

El pragmatismo imperante en los medios intelectuales, sobre todo a partir de que se decretó no sólo la obsolescencia, sino la muerte del marxismo y del socialismo como alternativa, ha cobrado más víctimas entre los cuadros académicos, que se han visto obligados, por necesidad o por vocación legítima, a ser oportunistas. Este no es un hecho irrelevante. Los oportunistas de todos los tiempos necesitan demostrar que son más papistas que el papa, no para afirmar para sí sus nuevas y cambiantes posiciones, sino para que les crean su fidelidad a los nuevos tiempos en la larga cadena de difusores de las ideologías dominantes. Sin esta caterva de oportunistas las dictaduras, en el Este y en el Oeste, no habrían tenido tantos propagandistas y vigilantes ideológicos. Los resultados del fenómeno son más que conocidos: el estancamiento, cuando no la involución hacia su contrario, del pensamiento crítico y, por supuesto, la ausencia total de innovaciones científicas, el oscurantismo, la mediocridad como fórmula de sobrevivencia y, pero aun, la reducción de las

universidades públicas a centros de segunda en la formación de cuadros científicos del país.

En esta perspectiva, con la política seguida por los tres últimos gobiernos de México, no se trata de cerrar, digamos, las universidades públicas, sino subordinarlas, ahorcarlas, reducirlas a su mínima expresión. Paralelamente, se intenta cooptar a los mejores cuadros, vía cedazos de dos tipos fundamentalmente: por la selección de comisiones dictaminadoras previamente seleccionadas entre afines a la ideología dominante, y por el ofrecimiento de recursos a quienes acepten investigar temas escogidos en las esferas pública y privada (cada vez menos diferenciadas entre sí).

Con este sistema, muy inteligente, no se ahogan del todo las expectativas de colocación en el mercado de trabajo externo a las universidades para los egresados de las universidades públicas, ni de ascenso y promoción, al tiempo que los egresados de las universidades privadas tienen todas las garantías para encontrar los mejores trabajos<sup>11</sup>.

Otro elemento que ya influye seriamente en la vida académica de las universidades y en lo que suele llamarse producción de investigadores, es la ausencia de expectativas reales en términos no directamente económicos aunque no ajenos a éstos.

En la vía de los sueldos, ningún joven ve como expectativa atrayente el ingreso económico de sus profesores, y si el éxito en la sociedad capitalista se mide por la capacidad de consumo, quien estudia una carrera profesional requerirá mucha vocación para aspirar a una carrera académica.

Pero en las universidades no existe ahora, o desde hace unos 15 ó 20 años, una carrera propiamente académica. Dos son las razones principales que explicarían este fenómeno, además de las ya mencionadas antes: 1) la restricción de contrataciones de nuevos cuadros docentes y de investigación, por las políticas de austeridad seguidas por los últimos gobiernos y que se reflejan, como se ha visto, en el gasto público para la educación superior y la CyT, y 2) por una suerte de escalafón prácticamente rígido en los niveles de ascenso y promoción de los académicos.

No conozco estudios sobre estos dos puntos, pero algunos ejemplos podrían ser ilustrativos de lo que se dice. En una coordinación profesional de la UNAM, en la

<sup>11</sup>En las universidades y tecnológicos privados es frecuente leer ofrecimientos de trabajo a futuro para estudiantes que egresarán en dos años. Si reúnen determinados requisitos y los mantienen hasta titulares, tienen asegurado su trabajo en una empresa privada.

gran área de las ciencias sociales, hay 44 profesores-investigadores. De éstos sólo tres son menores de 35 años y la antigüedad promedio de este cuerpo académico es de alrededor de 15 años. La conclusión es obvia: en los últimos años no han sido contratados nuevos profesores-investigadores (sin considerar aquí que varios de los que ya estaban prefirieron posiciones de alto nivel en la administración pública y abandonaron, coyuntural o definitivamente, sus plazas de tiempo completo).

El otro aspecto es el de las promociones y el escalafón. Si un joven egresado se incorpora a la llamada carrera académica a los 25 años de edad, dado el sistema normal de ascenso, a los 40 ó 45 años alcanzará la máxima categoría. Esto significa que en los siguientes 25 ó 30 años de vida útil, estatutariamente hablando, el profesor o el investigador no tendrá ascensos ni promociones, ni en niveles académicos ni en salarios. ¿Cuál sería, en estas circunstancias, su expectativa que lo motivara a continuar en la universidad, además de una profunda vocación?

Si una persona invierte 15 años de su vida profesional para alcanzar el máximo nivel universitario, en la docencia y la investigación, tiene adelante 30 años, el doble exactamente, sin ningún estímulo (pues las revisiones de salarios contractuales, como ha quedado claro, se dan muy a la zaga de la inflación y bajo criterios de topes salariales). Si se añade el hecho de que las nuevas contrataciones se han restringido notablemente en los últimos 15 años, un investigador del máximo nivel carecerá (carece) de ayudantes de investigación y de pirámides de investigación para emprender estudios de largo aliento. Aquí el resultado también es obvio: si se resiste la tentación de tener otras ocupaciones remuneradas, el trabajo de investigación será, por lo general, una labor individual y a menudo solitaria, con los mínimos apoyos institucionales y con menos expectativas y estímulos.

En síntesis, no existe, propiamente, una carrera académica en las universidades, y en las ciencias sociales y las humanidades menos, ya que ni siquiera se consideran dentro de las prioridades nacionales (en la lógica de la tecnocracia gubernamental) como para ser estimuladas con ingresos extraordinarios. Se trabaja mucho y se produce poco, incluso por razones de sobrevivencia en un medio crecientemente reducido en cuanto a apoyos en recursos y crecientemente competitivo por lo mismo.

Y aquí se forma un círculo vicioso: el profesor o el investigador carece de condiciones para su trabajo y de estímulos, lo que lo obliga a trabajar solo y sin entusiasmo; el resultado será una producción precaria; esta miniproducción no auspiciará el avance científico y éste, a su vez, se reflejará en la formación de profesionales, y así sucesivamente hasta llegar al punto fundamental: el debilitamiento de nuestros

centros de enseñanza y de investigación, el rezago y la dependencia en ésta, la acentuación del subdesarrollo y el oportunismo intelectual (e incluso científico).

### ***A manera de conclusión***

La política neoliberal en relación a las universidades, a la producción científica y a la formación de la inteligencia libre, autónoma y eventualmente crítica, es, en México como en otros países - tanto desarrollados como subdesarrollados -, fundamentalmente clasista, elitista de hecho, pese a que se presenta bajo apariencias democráticas. El modelo seguido por los gobiernos de los últimos 15 años presenta semejanzas en varios países y un común denominador: no se intenta desaparecer a las universidades públicas, pero sí mantenerlas al mínimo, enmarcándolas en un sistema darwinista de selección, en el que están en desventaja por comparación a las universidades privadas. El área de ciencias sociales y humanidades sufre, más que otras en México, hostigamientos y discriminación y, además, mediante mecanismos de todo tipo, algunos sutiles, se intenta corromperla y subordinarla a los requerimientos del capital y a la ideología dominante.

Los intelectuales, a su vez, se ven obligados, con frecuencia más por razones estructurales que de vocación, a matizar sus críticas cuando no a callarlas. La crisis, y no sólo la económica, es un caldo de cultivo favorable para la aplicación de dicha política neoliberal y para inhibir las respuestas que provoca en los medios intelectuales y académicos.

El presente tiene características objetivas de transición, como todos los presentes, pero su perspectiva es, para decirlo suavemente, difusa, a diferencia de los años 60 y principios de los 70. Y esta incertidumbre del futuro es condición favorable para que la ofensiva neoliberal encuentre menos resistencias en la conciencia crítica y democrática potencial.

Repensar el papel de las universidades públicas y el rol que estamos jugando los intelectuales críticos, es una obligación impostergable que comienza, probablemente, por el diagnóstico de nuestro presente, pero también por la imaginación de un nuevo sistema de valores que enfrente el retroceso, la involución a donde se nos quiere llevar bajo esquemas de modernización.

**Referencias**

- \*Anónimo, REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES. XXXIV ,134. p17-37 - México, UNAM. 1988; Universidad y Estado en América Latina: historia de encuentros y desencuentros.
- \*Lustig, Nora et. al., EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (1980-1987). p3 - México, Academia de la Investigación Científica. 1989; Evaluación de 1988 y situación global actual del SNI.
- \*Malo, Salvador, EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES. - México. 1989;
- \*Malo, Salvador; González, Beatriz, REVISTA CIENCIA Y DESARROLLO. -